

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.

En la Imprenta de Acosta, Fortaleza-21.



PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1878.

MARTES 18 DE JUNIO.

Núm. 73.

Parte Oficial.

GOBIERNO GENERAL

DE LA

ISLA DE PUERTO RICO.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

EXPOSICION A. S. M.

SEÑOR:

La organizacion municipal que, reducida á muy estrechos límites, regia en la Isla de Puerto-Rico desde 1846, se intentó reemplazar en 1875 con el régimen provincial y municipal que las Cortes Constituyentes habian decretado para la Peninsula. Pero tan trascendental como no bastante meditada reforma ha demostrado una vez mas la ineficacia de toda medida legislativa que no esté en armonia con las necesidades y condiciones del país para que se dicta.

Basada en un exagerado espíritu descentralizador, sin precedente en los hábitos y costumbres de aquellos pueblos y en pugna con los principios de Gobierno á ellos aplicables, la Autoridad Superior de la Isla, al recibir los Decretos de 27 de Agosto del expresado año de 1870 que contenian la mencionada reforma, se vio obligada á suspender la publicacion del mas importante de ellos, del relativo á la Ley municipal, y representó al Ministerio sobre la necesidad de introducir en el algunas modificaciones.

El Gobierno examinó las razones en que se fundaba la consulta y, estimandolas valederas, aprobó casi todas las modificaciones pedidas, autorizó su introduccion en el Decreto, y mandó que este, ya modificado, se publicara en la GACETA de la Isla.

Publicóse en efecto; pero aún así no se consideraron suficientes las modificaciones introducidas y, en su consecuencia, se expidió el Real Decreto de 13 de Diciembre de 1872 que añadía otras nuevas, y en cuyo preámbulo se declaraba que no se habia puesto en ejecucion el de 1870 por las dudas ocurridas y no resueltas todavía.

Planteadas al fin la nueva organizacion provincial y municipal, la experiencia vino pronto á demostrar que en época y circunstancias dadas podia llegar á constituir un verdadero peligro para los altos intereses del Estado y perjuicios inmensos para la Isla de Puerto-Rico.

Con el fin de evitar ese peligro se dictaron los Decretos de 5 y 7 de Febrero de 1874, por medio de los cuales el Gobernador Superior de la Isla, autorizado al efecto por el Gobierno de la Republica, disolvió la Diputacion provincial y todos los Ayuntamientos, y nombró por sí las personas que habian de constituir dichas Corporaciones.

Esta medida, de carácter excepcional, y las anteriores y sucesivas modificaciones parciales, vencieron las dificultades del momento, pero no por eso habia desaparecido la imperiosa necesidad de una esencial y conveniente reforma.

Solicitada con insistencia por las diferentes personas que tuvieron á su cargo el Gobierno General de la provincia, el Ministerio-Regencia manifestó en 2 de Enero de 1875 su propósito de no legislar sobre materia alguna, pero al mismo tiempo concedió facultades á la referida Autoridad Superior para hacer cuanto exigiera el orden público y la integridad de la patria.

Así continuaron las cosas hasta la promulgacion de la Ley de 16 de Diciembre de 1876, cuyo artículo cuarto dispuso que se aplicaran á la provincia de Puerto-Rico las reformas de las Leyes orgánicas provincial y municipal sancionadas para la Peninsula, con arreglo á las prescripciones contenidas en el artículo 89 de la Constitucion de la Monarquía. Instruyese, en su consecuencia, por este Ministerio el oportuno expediente, en el cual han emitido su parecer el Consejo de Administracion y el Gobierno General de la Isla y el Consejo de Estado en pleno.

Aceptando el criterio de este último Cuerpo, el Ministro que suscribe entiendo que, dado el estado particular de civilizacion y cultura de Puerto-Rico, es preciso organizar allí el Poder de tal manera que intervenga en todos los actos administrativos de alguna importancia; que conozca el desarrollo de todos los intereses; que sancione con su autoridad toda iniciativa; que regule todo movimiento de verdadera trascendencia que sea, en suma, el centro moderador de todas las fuerzas, para que, aún cuando en su nacimiento y progreso se las deje en completa libertad, pueda enfréntarlas si llegan á traspasar los límites de la legalidad y de la conveniencia pública.

Sin esta organizacion no es posible mantener en tan apartadas regiones el prestigio de la Autoridad, ni vigorizar su accion para que realice los fines de que se halla encargada.

Por las razones dichas procede introducir algunas reformas en las Leyes de la Peninsula que han de aplicarse á la Isla de Puerto-Rico, ya en lo relativo á la parte política y principalmente al nombramiento de Alcaldes, Comisarios y Secretarios de los Ayuntamientos y Diputacion, ya en lo concerniente á las facultades de aquellas Corporaciones y á la gestion de su Hacienda y Contabilidad, sin contar otras de menos trascendencia, fundadas en motivos de diversa entidad y consideracion.

Debe consignarse en primer término que, si con relacion á la fuerza armada que ha de ser costada por los Ayuntamientos para atender á los servicios de po-

licia de seguridad, urbana y rural, se mantiene el precepto de la Ley peninsular que atribuye exclusivamente al Alcalde el libre nombramiento y separacion de aquellos agentes, es porque esta prescripcion no sirve de estímulo para que se conserve el actual Cuerpo de Orden público ó se modifique en su organizacion, si pareciese conveniente. Las bases esenciales en este punto son, el libre nombramiento y separacion de los individuos que compongan aquel Cuerpo por el representante del Gobierno, y la obligacion de los Municipios de satisfacer proporcionalmente los gastos que ocasionen, consignándolos en sus respectivos presupuestos; y estas bases se hallan claramente definidas en el proyecto adjunto.

Pocas son las modificaciones introducidas en el título primero de la Ley municipal, que se refiere á los términos municipales y sus habitantes, derechos y obligaciones de estos y empadronamientos; sin embargo, ha parecido conveniente otorgar al Gobernador General ciertas atribuciones que la Ley de la Peninsula confiere á la Diputacion, haciendo además otras alteraciones dimanadas de la especialidad del territorio de la Isla; y en tal sentido han sido modificados los artículos referentes á esta materia.

El título segundo de la misma Ley de la Peninsula que trata del Gobierno y Administracion de los Municipios y de las Juntas municipales, es el que debía modificarse mas profundamente; y prescindiendo de otras alteraciones de menor entidad, la principal que se introduce se refiere al nombramiento de los Alcaldes y Tenientes de Alcalde. Los primeros serán nombrados por el Gobernador General de entre los Concejales ó libremente y disfrutarán el haber que se les señale, con cargo al presupuesto municipal. Sobre su carácter de ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos y gestores de los intereses del Municipio, ha parecido indispensable que prevalezca el que tienen de representantes del Poder público, y para ello se les constituye en verdaderos funcionarios del Gobierno. Atendida y satisfecha cumplidamente la representacion de los habitantes de los respectivos términos municipales, con la eleccion de todos los miembros que han de formar el Ayuntamiento y las Juntas, era preciso atender y satisfacer de igual modo á la intervencion del Poder público en la multiplicidad de actos encomendados á las expresadas Corporaciones; y solo siendo los Alcaldes funcionarios del Gobierno, nombrados por el mismo, y señalándoles el correspondiente sueldo, se asegura en Puerto-Rico esa intervencion y se mantiene en el Gobierno y organizacion de los Municipios el orden, la regularidad y el buen régimen que en esta materia son indispensables.

Respecto á las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho electoral, aún habida consideracion á los distintos elementos que constituyen el estado social de la Isla, se establece el censo de veinte y cinco pesetas, el cual no guarda armonia ciertamente con el de cincuenta escudos que, para ejercer el sufragio en Ultramar, fijó el Decreto de 14 de Diciembre de 1868, elevado á Ley en el año siguiente, pero responde á la variacion que de entonces acá ha debido sufrir la manera de ser de aquella Antilla, despues de abolida la esclavitud, cuya medida ha venido sin duda á identificarla mas con las provincias peninsulares, de donde resulta la oportunidad de dar mayor amplitud á los elementos constitutivos de las Corporaciones populares.

Refiérese el título tercero á la Administracion municipal y en él se trata de las atribuciones de los Ayuntamientos, sus sesiones y modo de funcionar; de la Administracion de los pueblos agregados y de las funciones de los Alcaldes, Tenientes, Síndicos, Regidores y Alcaldes de barrio y Secretarios. También en este título se han introducido varias modificaciones, pues sin privar al Municipio de su legitima iniciativa y gestion de los intereses de sus administrados, era preciso intervenir sus acuerdos, sometidos á la aprobacion Superior en unos casos, limitándolos en otros, por consideraciones de orden público y buena administracion, á lo prevenido en las disposiciones generales vigentes y amparar por fin los derechos particulares con los recursos que para este objeto se establecen. En tal sentido se han modificado los preceptos que se refieren al nombramiento de ciertos empleados de los Municipios, policía de seguridad, Instruccion pública, Secretarios de los Ayuntamientos y otros menos importantes.

Dentro de las bases y principios adoptados para los títulos anteriores se introducen tambien alteraciones en el cuarto que se refiere á la Hacienda municipal; mereciendo particular mención la relativa á arbitrios sobre artículos de consumo, pues aún cuando esta forma de tributacion no se halle arraigada en Puerto-Rico, podrá irse preparando paulatinamente para desarrollarla luego en mayor escala. A esto tienden principalmente las alteraciones que en este punto se han hecho.

Dado el carácter que el proyecto atribuye á los Ayuntamientos y á los Alcaldes, era preciso introducir algunas variaciones en los dos últimos títulos de la Ley, que se refieren á los recursos y responsabilidades que nacen de los actos de los Ayuntamientos, y al Gobierno político de los Distritos municipales.

Teniendo la Ley provincial tan íntimo enlace con la municipal, á la que se refiere en gran número de disposiciones, sería repetir en gran parte lo anteriormente expuesto el señalar las variaciones que se han hecho en ella. Todas sustancialmente parten y se derivan de la necesidad de vigorizar en Puerto-Rico la Autoridad del Gobierno General, concediéndole el lleno de facultades que necesita para que sin limitacion de ningún género pueda atender al Gobierno y Administracion de la provincia.

A este fin, aparte de las modificaciones que son inherentes á los principios adoptados en la Ley municipal, se introduce en el proyecto una muy importante, pero que no es nueva sino que se halla tomada del ar-

tículo 7º del Decreto orgánico provincial, dictado para aquella Isla en 28 de Agosto de 1870. Tal es la de dar facultades al Gobernador General para suplir por sí ó por sus Delegados, la accion provincial y municipal, ya nombrando la Diputacion y Ayuntamientos en los casos en que no se reúnan, ó completando su número cuando no lo hagan en el suficiente para tomar acuerdos, ya supliendo las funciones de las mismas Corporaciones, si estas se negaren á ejercerlas; disposicion que tiende á evitar cierto género de conflictos que, aún cuando se les suponga alguna vez de escasa importancia, no por ello dejarían de perturbar y entorpecer la constante y ordenada marcha de la Administracion local.

En suma, respetando la iniciativa de las Corporaciones populares, á las cuales se encomienda la gestion y direccion de todos los intereses peculiares de los pueblos ó de la provincia y consignando el principio de la publicidad de los acuerdos de trascendencia é importancia, que son las bases á que mas se extienden en esta materia las legislaciones descentralizadoras, era forzoso compensar tan amplias atribuciones puntualizando y precisando debidamente la intervencion del Poder ejecutivo en los actos de la Administracion local, á fin de que en ningún caso puedan perjudicarse los intereses generales y permanentes de la Nacion.

Fundado en las consideraciones expuestas y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de Decreto. — Madrid, 24 de Mayo de 1878. — SEÑOR: A. L. R. P. de V. M., JOSÉ ELDUAYEN.

REAL DECRETO.

En cumplimiento de lo prevenido en las disposiciones transitorias de las Leyes municipal y provincial promulgadas en la GACETA DE MADRID del cuatro de Octubre último; usando de la autorizacion concedida á Mi Gobierno por el artículo ochenta y nueve de la Constitucion de la Monarquía; y de acuerdo con el parecer del Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros; Vengo en decretar lo siguiente: — Artículo único. Se promulgarán y observarán en la Isla de Puerto-Rico las mencionadas Leyes con las modificaciones introducidas en las mismas, de las cuales dará Mi Gobierno cuenta á las Cortes y cuyo tenor incorporado al texto de dichas Leyes se publicará á continuacion de este Real Decreto.

Dado en Palacio á veinte y cuatro de Mayo de mil ochocientos setenta y ocho.

ALFONSO.

El Ministro de Ultramar,

JOSÉ ELDUAYEN.

LEY PROVINCIAL

DE LA

ISLA DE PUERTO-RICO.

TITULO I.

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RICO Y SUS HABITANTES.

Artículo 1º El territorio de la Isla de Puerto-Rico y sus adyacentes constituye una provincia de la Nacion española.

Su Capital reside en la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico.

Art. 2º Son aplicables á los habitantes de la provincia las disposiciones contenidas en el título I de la Ley municipal en lo relativo á su condicion y derechos.

TITULO II.

DE LA ADMINISTRACION CIVIL DE LA PROVINCIA.

CAPITULO I.

Autoridades provinciales.

Art. 3º Las Autoridades administrativas de la provincia son:

1º — El Gobernador General de la Isla.

2º — La Diputacion provincial.

3º — La Comision provincial con el carácter y funciones que determina esta Ley.

Art. 4º El Gobernador General es nombrado y separado por el Gobierno, así como todos los empleados que, bajo las órdenes de aquel, hayan de cumplir las funciones que no estén reservadas á la Diputacion y Comision provincial.

Art. 5º La Diputacion provincial se compone de los Diputados elegidos por los mismos electores de Ayuntamientos, con arreglo al artículo 40 de la Ley municipal.

Cada partido judicial elegirá tres Diputados provinciales.

Art. 6º La Comision provincial se compone de cinco vocales nombrados con sujecion á esta Ley.

CAPITULO II.

Funciones del Gobernador.

Art. 7º Corresponde al Gobernador de la provincia como Jefe Superior de la Administracion:

1º — Presidir con voto la Diputacion provincial y la Comision cuando asista á sus sesiones.

2º — Autorizar sus actos.

3º — Comandar y ejecutar los acuerdos de la Diputacion y Comision, cuidando de su puntual y exacto cumplimiento.

4º — Llevar el nombre y representacion de la provincia en todos sus asuntos judiciales, informes, correspondencia y comunicaciones de todo género.

5º — Inspeccionar las dependencias de la provincia y Ayuntamientos comprobando el estado de sus Cajas, Archivos y cuentas y cuidando de que sean cumplidas, así las Leyes y disposiciones generales, como los acuerdos de la Diputacion; vigilar su ejecucion y la preparacion de todos los asuntos en que haya de ocuparse. En su virtud dictará las disposiciones necesarias al efecto, previendo lo que corresponda en casos de omision, negligencia ó oposicion por parte de los encargados de la ejecucion y dando cuenta de todo al Gobierno Supremo.

6º — Suspender los acuerdos de la Diputacion provincial y de los Ayuntamientos cuando proceda con arreglo á esta Ley y á la municipal, y ejercer las atribuciones que las mismas y las demás vigentes les concedan.

7º — Suspender en el ejercicio del cargo á los Diputados provinciales, Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Concejales, en los casos y forma prevenidos en esta Ley y en la municipal.

8º — Suplir por sí ó por sus delegados la accion provincial y la municipal, ya nombrando la Diputacion y Ayuntamientos, cuando no se reúnan, ó completando su número cuando no lo hicieren en el suficiente para tomar acuerdos, ya supliendo las funciones de las mismas Corporaciones, cuando se negaren á ejercerlas, y dando cuenta en todo caso al Ministro de Ultramar.

Art. 8º El Gobernador puede dirigir á la Diputacion las excitaciones que le parezcan oportunas, sobre las cuales está obligada á tomar acuerdo.

CAPITULO III.

Organizacion y modo de funcionar de la Diputacion provincial.

Art. 9º La provincia de Puerto-Rico se dividirá en tantos Distritos como Diputados provinciales tenga que elegir con arreglo á lo prevenido en el artículo 5º. Cada Distrito nombrará un solo diputado.

Art. 10. Ningun Municipio formará parte de distintos Distritos electorales.

Art. 11. El Gobernador General formará un proyecto de division de la provincia en Distritos, con designacion de los pueblos cabeza de cada uno, y lo publicará en la GACETA DE PUERTO-RICO.

Art. 12. En el término de un mes, contado desde dicha publicacion, recibirá el Gober-